

INNOVACIÓN



Las 'start up
legaltech' más
prometedoras
para 2022

INNOVACIÓN

Cuáles son las 'start up legaltech'

Los despachos de abogacía por proyectos, las compañías que apuestan por la identidad digital y la trazabilidad



Natalia Martos, fundadora de Legal Army.

Legal Army

Silicon Valley e innovación legal

Natalia Martos fue directora jurídica en Tuenti hasta que la red social fue vendida a Telefónica. Un cambio que llevó a esta abogada hasta Silicon Valley para estudiar los nuevos modelos ALSP (Alternative Legal Service Providers). "En 2018 fundé Legal Army, un prestador de servicios jurídicos alternativos basado en el empoderamiento tecnológico para maximizar la eficiencia, tanto del trabajo como del negocio", explica Martos. La compañía ofrece sus servicios, sobre todo a 'start up', con tarifas basadas en iguales mensuales, "sin limitación de horas ni consultas, dando servicios a todo tipo de sectores".

Biometric Vox

La huella de la voz

En febrero de 2019 Biometric Vox se convertía en socio de Cuatrecasas. La plataforma, construida con tecnología de biometría vocal, sellado electrónico y encriptación con depósito de clave notarial, permite por vez primera la firma electrónica avanzada en el transcurso de una simple llamada telefónica. La huella vocal es única e intransferible. La incorporación de la biometría vocal mejora la imagen de la compañía y el usuario está familiarizado con el uso de voz en los asistentes virtuales o vocales. La 'start up' cuenta con clientes de la talla de Banco Sabadell.



Carlos Heredia, responsable de tecnología de Biometric Vox.



Claudia Pierre, fundadora de Meeting Lawyers.

Meeting Lawyers

De la mano con la tradición

Abogados que responden consultas legales en menos de dos minutos disponibles los 365 días del año. Esto es lo que ofrece Meeting Lawyers, una 'start up' fundada por Claudia Pierre y Carlos Ripollés que pone a disposición de sus clientes un chat en el que podrán preguntar sus dudas a profesionales del derecho especializados en diferentes áreas. Martínez-Echevarría & Rivera invirtió en la 'legaltech' 200.000 euros en palabras del socio director del despacho, Vicente Morató, "conocer el sector 'legaltech' desde dentro", aclara el letrado.

LexaGo

Dudas laborales resueltas

LexaGo es una 'legaltech' que utiliza la inteligencia artificial para en menos de un minuto resolver las dudas más habituales de laboral a despachos, departamentos de recursos humanos y asesorías jurídicas. Su modelo de negocio se basa en una tarifa plana de 59,90 euros que da derecho a 48 consultas en todo el año de laboral. "Casi todo el mundo tiene las mismas dudas. Hay una recurrencia de consultas del 74%", explica Joaquín Castiella, fundador de la 'start up', que lleva en marcha más de año y medio.



Joaquín Castiella, socio fundador de LexaGo.

Alejandro Galisteo, Madrid
El pasado mayo, Albert Rivera se convertía en presidente de dos organizaciones distintas que acababan de darse la mano. Martínez-Echevarría & Rivera Abogados anunciaba su entrada en el capital de Meeting Lawyers. Tanto en el despacho como en la 'legaltech', el expolítico naranja ostenta el cargo de presidente: ejecutivo para Portugal y España en el bufete, y del consejo de administración en la 'start up' legal.

En Meeting Lawyers también habían reservado un puesto en el consejo para Vicente Morató, socio director de Martínez-Echevarría & Rivera tras la inversión de 200.000 euros que el bufete realizó en la compañía tecnológica que pone a disposición de sus clientes un chat en el que podrán preguntar sus dudas a profesionales del derecho especializados en diferentes áreas. "Entramos como inversores capitalistas, colaborando únicamente en la financiación y no en la práctica del negocio jurídico", aclara Morató sobre un movimiento que describe como "una manera de ver desde dentro cómo se mueve el mundo del 'legaltech'".

La alianza entre la abogacía y la innovación es una de las claves que hacen que las 'start up' legales puedan desarrollar todo su potencial. Que se lo digan si no a Natalia Martos, fundadora de Legal Army, una ALSP (Alternative Legal Service Providers) que puso en marcha en 2018 la ex directora jurídica y de privacidad de Tuenti, que se dio cuenta cómo las tecnologías cambian todas las industrias, incluyendo la jurídica, generando modelos de negocio mucho más eficientes. No obstante, antes de lanzar su compañía 'legaltech' pasó por dos bufetes para coger lo mejor de los dos mundos, el tradicional y el innovador hasta formar una compañía que hoy ya asesora a empresas cotizadas.

Trayectoria similar a la de Martos es la que recorre Carlos Guerrero hasta fundar, a principios de este año AttoLón, otra firma de servicios legales alternativos que, después de contar con un equipo de hasta 15 personas puso en marcha su propia aceleradora,



Plataformas más demandadas



ALSP

Grandes compañías como despachos colaboran con las firmas de servicios legales alternativos (ALSP, por su siglas en inglés) para asesoramiento vinculados a la tecnología.



Firma digital

La firma digital está cada vez más implantada en procesos, tanto cotidianos como mercantiles de todo tipo, por lo que son de gran utilidad.

Los proveedores de servicios legales alternativos ganan cada vez más peso en el sector

ra, Reboot, una denominación que, en palabras de su consejero delegado, Guerrero, refleja la idea que está detrás del proyecto. "Nos definimos como un ecosistema de 'legaltech' y de 'start up' proveedores de servicios legales alternativos", aclara el experto que financió con 50.000 euros el lanzamiento.

De dar cobijo a pequeñas empresas que hoy se pueden considerar como referentes en el 'legaltech' español saben mucho en Cuatrecasas. No obstante, por su aceleradora,

con más proyección en 2022

junto a las 'legaltech' que se unen para colaborar con bufetes tradicionales triunfan en el sector.



por el mercado



Reclamaciones

En España, cada vez más se están interponiendo reclamaciones masivas en los juzgados, una práctica a la que están contribuyendo las 'legaltech'.



Trazabilidad

Realizar una junta de socios a distancia es posible gracias a que se puede trazar de forma virtual todos los puntos acordados en la sesión.

Cuatrecasas Acelera, que va por su sexta edición, ya han pasado algunas de las *start up* legales más importantes del panorama nacional, como Validated ID, que cerró su última ronda por encima de los dos millones de euros.

Pero no solo los grandes bufetes del país dan aire a futuros gigantes de la innovación legal. Telefónica, a través de Wayra, su centro de innovación, y Abanca entraron en el accionariado de Councilbox. Lo hicieron de la mano de Adara Ventures, el fondo

Los emprendedores legales se apoyan en grandes compañías para lanzar sus soluciones

que ha liderado la ronda de financiación por la que la compañía que gestiona de forma integral los procesos de reuniones telemáticas ha levantado cinco millones de euros. Asimismo, esta primavera, PwC Tax & Legal anunció el lanzamiento de Springboard, una aceleradora de *legaltech* que cuenta con el soporte tecnológico de Microsoft. En esta primera edición entraron compañías tan innovadoras como Reclamaclick, una plataforma colaborativa que rentabiliza las reclamaciones masivas de cualquier cuantía.

Muchas de esta *legaltech* aplican la tecnología *blockchain* en sus soluciones, algo que está en el ADN de Blocknitive, compañía que facilita la interoperabilidad de los datos permitiendo centralizar los diferentes consentimientos cedidos por una persona a una entidad.

Por último, el pasado año comenzó su andadura LexaGo, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a que los despachos y departamentos de recursos humanos tengan una respuesta inmediata a cuestiones habituales sobre, entre otras cosas, permisos de trabajo, excedencias, despidos y calendario laboral.

Councilbox

Reuniones a distancia

Javier Polo es el consejero delegado de Councilbox, una empresa que permite celebrar juntas y consejos de inversión de forma remota. Su herramienta de gestión societaria a distancia sirve para grabar y trazar todo lo acordado en las reuniones. La situación provocada por el Covid-19 les dio la oportunidad de realizar grandes asambleas remotas, así como ejecutar la primera junta 100% online de una empresa cotizada en España. La 'start up', fundada en 2015, celebró durante 2020 más de 600 reuniones con clientes como el Ministerio de Justicia, Acciona, Codere, Sacyr, Meliá y Solaria.



Javier Polo, consejero delegado de Councilbox.



Carlos Guerrero, socio fundador de Attolón.

Attolón

Aceleradores de proyectos

Seis meses después de su nacimiento, Attolón lanzó su propia aceleradora de 'legaltech'. La iniciativa, liderada por Carlos Guerrero, cuya compañía en la actualidad cuenta con 20 socios colaboradores, nació con el nombre de Attolón Reboot, una denominación que, en palabras de su consejero delegado, refleja la idea que está detrás del proyecto. "Nos definimos como un ecosistema de 'start up' proveedores de servicios legales alternativos", aclara Guerrero sobre una iniciativa financiada con fondos propios del despacho matriz de la propuesta.

Blocknitive

Datos protegidos en 'blockchain'

En 2018, los responsables de Blocknitive afrontaron el desafío de aunar dos conceptos que parecían incompatibles: Reglamento General de Protección de Datos con 'blockchain'. Tres años más tarde lo consiguieron lanzando al mercado Asefity Data. "Hemos conseguido encontrar un camino alternativo, haciendo que los datos personales se mantengan fuera de la cadena de bloques. Esto nos permite protegerlos y activar filtros de seguridad y privacidad", explica Miguel Peco, director de operaciones de la 'legaltech' que opera en siete países diferentes.



Miguel Ángel García, consejero delegado y Miguel Peco, director de negocio de Blocknitive.



Ignacio López-Aranguren y Jacobo López-Aranguren, fundadores de Reclamaclick.

Reclamaclick

Contra los fraudes menores

Sólo un 15% de los afectados por un fraude o abuso presenta una reclamación o acude a los tribunales para defender sus derechos. Este dato llevó a Jacobo López a fundar Reclamaclick, una 'legaltech' que pone en contacto a consumidores que quieren denunciar con abogados que tarifican sus servicios legales a éxito. La plataforma es totalmente gratuita para el consumidor. "sólo cobra al abogado una suscripción por el uso de esta tecnología a través de un modelo de pago por éxito", aclara López.